

## **ECUADOR (Nivel 2)**

Ecuador es país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños sujetos de tráfico sexual y explotación laboral. La mayoría de víctimas ecuatorianas son mujeres y niños explotados en el tráfico sexual dentro del país, así como forzados a trabajar en servicio doméstico, a mendigar y a ser realizar trabajo forzado principalmente en el sector agrícola. Los indígenas y los afros ecuatorianos son particularmente vulnerables. Algunas familias indígenas pobres han permitido que traficantes se hagan cargo temporalmente de sus hijos con el fin de ganar dinero tanto en el país como en países vecinos en donde se ven obligados a trabajar como empleados domésticos, en fábricas clandestinas, como vendedores ambulantes y en menor grado como mendigos. También se ha informado sobre mujeres y niñas ecuatorianas sometidas a trabajos forzados en Colombia, Brasil, Venezuela, Chile y Uruguay durante el período de este informe. De manera más limitada, mujeres y niños ecuatorianos son sujetos de prostitución forzada en países vecinos. En algunas partes del país, se ha informado que las pandillas locales están involucradas en el tráfico sexual. Ha habido también informes de niños ecuatorianos siendo forzados a dedicarse a actividades delictivas como el narcotráfico y el robo y de que grupos armados con base en Colombia reclutan niños ecuatorianos a la fuerza en la región fronteriza norte. Ecuador es país de destino de mujeres y niñas colombianas, peruanas y paraguayas explotadas en el tráfico sexual y servidumbre doméstica. Los refugiados y migrantes colombianos son obligados a realizar trabajos forzados en las plantaciones de aceite de palma.

El gobierno del Ecuador no cumple integralmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata, sin embargo está desplegando considerables esfuerzos para lograrlo. Durante el año, el gobierno incrementó el número de condenas por trata, incluyendo dos por trabajo forzado, y fortaleció los servicios para las víctimas a través de mayor financiación para las ONG que proporcionan servicios a las víctimas y ofrecen albergue a los niños víctimas de la trata. El gobierno ha fortalecido su unidad policial anti trata. Los servicios especializados para las víctimas adultas continuaron siendo limitados y su provisión fue desigual en todo el país. La mayoría de esfuerzos de aplicación de la ley se concentraron en la trata de niños y no se informó sobre condenas en casos que involucraron a víctimas adultas de la trata. La complicidad de funcionarios en casos relacionados con la trata continuó siendo una preocupación.

**Recomendaciones para el Ecuador:** Incrementar los esfuerzos por investigar, enjuiciar y condenar a los acusados de delitos de trata, particularmente en los casos que involucren víctimas adultas; incrementar el financiamiento para servicios de cuidado especializado para las víctimas de la trata, particularmente para las víctimas adultas; diseñar e implementar procedimientos formales para identificar a las víctimas de la trata en las poblaciones vulnerables, como niños y adultos en la prostitución o entre niños y trabajadores migrantes, e incrementar la identificación de las víctimas adultas; hacer penalmente responsables a los funcionarios públicos cómplices de la trata a través de investigación y enjuiciamiento; incrementar la capacitación anti trata de agentes de policía, jueces, inspectores laborales, funcionarios de inmigración, asistentes sociales y otros funcionarios públicos locales y mejorar la recopilación y coordinación de datos.

## **Enjuiciamiento**

El gobierno notablemente fortaleció los esfuerzos de aplicación de la ley durante el año a través de un mayor número de condenas y de la expansión de su unidad policial dedicada. El código penal del Ecuador prohíbe toda forma de trata y establece penas de seis a nueve años de prisión para los condenados por los delitos de trata con fines de explotación laboral, y de 8 a 12 años por los delitos de trata con fines de explotación sexual. Estas penas son suficientemente severas y proporcionales con aquellas prescritas para otros delitos graves, como la violación. Los fiscales a menudo se apoyan en otras disposiciones legales, incluso aquellas que prohíben el proxenetismo, para enjuiciar los delitos de trata de seres humanos ya que esas disposiciones son conocidas y requieren menos recursos para investigación; algunas de esas disposiciones prescriben sentencias menores que las regulaciones anti trata.

El gobierno incrementó considerablemente el número de oficiales policiales en la unidad anti trata en Quito hasta un total de 27 oficiales. La unidad nacional encargada de enjuiciar el crimen organizado en Quito manejó casos de trata en asociación con los fiscales locales. La falta de financiamiento limitó los esfuerzos policiales y judiciales y la coordinación de personal y de aplicación de la ley continuó siendo desigual. La mayoría de investigaciones se concentraron en el tráfico sexual o en la explotación laboral de niños. La recolección de datos sobre la trata de personas continuó siendo un reto, y una base de datos diseñada por una organización internacional para que el gobierno monitoree los esfuerzos de aplicación de la ley permaneció en las etapas iniciales de implementación.

La unidad de policía informó haber enviado 150 investigaciones a los fiscales en 2012, pero no informó cuántos casos involucraban explotación laboral y cuántos explotación sexual. Las autoridades informaron sobre el enjuiciamiento de al menos 23 delincuentes acusados de trata, y sobre la condena de 10 en 2012. Tres de esas condenas se lograron bajo la ley específica anti trata, inclusive dos condenas por explotación laboral; todos los casos que resultaron en condenas involucraron a niños. Las sentencias fueron desde libertad condicional y multas, en el caso de un delincuente menor de edad, hasta los 12 años de prisión. En comparación, el gobierno no informó de condenas de ningún acusado de trata en 2011.

Algunos funcionarios, particularmente jueces demostraron falta de conocimiento sobre la trata de personas, confundiéndola con la prostitución o con infracciones laborales, en detrimento de la víctima durante el proceso legal. Otros jueces redujeron los cargos de trata a cargos menores como proxenetismo, que conlleva penas más cortas. Organizaciones de la sociedad civil y algunos funcionarios señalaron que la corrupción impedía los trabajos de investigación y enjuiciamiento. Según las ONG y algunos oficiales, funcionarios corruptos presuntamente informaron a los traficantes sobre las redadas policiales, ignoraron la trata con fines sexuales en lugares de comercialización sexual, y algunas autoridades locales emitieron licencias falsificadas de operación para burdeles. No se enjuició ni se condenó a funcionarios cómplices el año pasado, a pesar de que se informó que un juez estaba bajo investigación por complicidad. Las autoridades proporcionaron mayor capacitación sobre trata de seres humanos a la policía, a los funcionarios de inmigración y a otros funcionarios durante el año, inclusive entrenamiento intensivo a los nuevos miembros de la unidad policial anti trata. El gobierno cooperó con los gobiernos

sudamericanos para investigar los casos de trata transnacional, incluso algunos que involucraron explotación laboral.

## **Protección**

El gobierno ecuatoriano incrementó los esfuerzos de protección a las víctimas durante el año, incluso proporcionando financiamiento a las ONG que cuidan de las víctimas de trata, a pesar de que los servicios especializados para las víctimas adultas continuaron siendo limitados y de que dichos servicios no estuvieron disponibles en todo el país. Las autoridades informaron sobre los esfuerzos continuos para retirar a los niños de los sitios de explotación sexual comercial, pero no se aplicaron sistemáticamente procedimientos para identificar a las víctimas adultas en las poblaciones vulnerables, como por ejemplo a las mujeres que trabajan en la prostitución. La policía informó haber referido víctimas a los servicios, consultando los mecanismos escritos de derivación, a pesar de que la derivación de víctimas de otros funcionarios se realizó *ad hoc*. La Policía identificó a 127 víctimas de la trata en 2012 –88 de las cuales eran explotadas con fines sexuales y 39 con fines de explotación laboral. La mayoría de las víctimas identificadas fueron niñas.

El gobierno ecuatoriano incrementó el financiamiento para servicios especializados para las víctimas en 2012 y proporcionó \$662.170 en financiamiento a cuatro ONG que atendieron a más de 130 víctimas de tráfico con fines de explotación sexual y laboral durante el año. Sin embargo, los servicios especializados para las víctimas no estuvieron disponibles en la mayoría del país. Las autoridades informaron que las víctimas pudieron recibir cuidados a través de una red de centros de protección administrados por el gobierno, así como en los alberges locales para las víctimas de violencia. Sin embargo, no hubo información sobre el número de víctimas que acudieron a estos centros en 2012, ni si todos los centros pudieron proporcionar los servicios y protección adecuados para las víctimas de la trata. En algunas partes del país, la policía no tuvo dónde albergar a las víctimas rescatadas. Hubo pocos servicios especializados disponibles para las víctimas adultas de la trata. Las ONG informaron que las víctimas adultas que necesitaban albergue fueron acogidas temporalmente en hoteles y que pudieron recibir servicios ambulatorios en los centros gubernamentales y ONG. Además de estos servicios de corto plazo, el gobierno informó que había proporcionado a las víctimas asesoramiento, capacitación laboral y formación educativa, pero no indicó cuántas víctimas recibieron los servicios en el año.

El gobierno alentó a las víctimas a cooperar en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de la trata y al menos algunas víctimas lo hicieron durante el año. El gobierno mantuvo y financió un programa de protección de víctimas y testigos que informó haber asistido a 25 víctimas de la trata en 2012, seis de las cuales fueron sometidas a explotación laboral. Muchas víctimas optaron por no participar en las investigaciones debido al temor a las amenazas, una insuficiente protección, falta de confianza en el sistema judicial o por el costo asociado con su participación en largos procesos judiciales. Se informó que las autoridades no penalizaron a las víctimas identificadas de la trata de personas por los actos delictivos cometidos como resultado directo de su condición de víctimas de la trata. El gobierno del Ecuador no proporciona alternativas legales específicas para el traslado de las víctimas extranjeras a países en los que estarían expuestas a penurias o represalias. Las autoridades informaron que a las víctimas extranjeras de la trata encontradas en redadas anti trata se les dio la opción de permanecer

temporalmente en el Ecuador, pero no informó a cuántas se les permitió hacerlo durante el año. El gobierno prestó algunos servicios a víctimas ecuatorianas de la trata que habían sido repatriadas.

## **Prevención**

El gobierno del Ecuador mantuvo sus esfuerzos de prevención durante el año. La Comisión Interinstitucional para la lucha contra la Trata de Personas se reunió con regularidad, y la Subdirección Anti Trata del Ministerio del Interior coordinó las actividades gubernamentales anti trata, concentrándose en fortalecer los esfuerzos de aplicación de la ley. Las autoridades continuaron con las campañas de información, muchas de las cuales se concentraron en la explotación sexual comercial de niños y, en asociación con las empresas del sector turístico, en prevenir la trata de niños para la explotación sexual. El gobierno no informó sobre la adopción de medidas para reducir la demanda de actos sexuales comerciales remunerados con adultos, ni la de explotación laboral durante el período objeto del informe.